**Unidad en las calles para enfrentar la ofensiva de los gobiernos y las patronales**

El 2017 ha empezado con nuevos ataques contra los trabajadores y el pueblo. La represión a las comunidades mapuches de Chubut, de la mano del gobernador Das Neves y la gendarmería de Macri, es la muestra más brutal de una política más general.

En estos días también fueron víctimas de la represión los “manteros” de CABA, los feriantes de Mendoza, los trabajadores gráficos de AGR-Clarín y los vecinos de Barrio Las Flores y del Barrio Barrio Nuestra Señora del Rosario (Lamadrid y Avellaneda).

Los trabajadores gráficos del grupo Clarín mantienen la fábrica tomada hace una semana tras los despidos del total del personal. El lock out patronal de esta empresa se enmarca con total sintonía en la flexibilización laboral reclamada por Macri y es una clara muestra de la ofensiva para imponer el ajuste sobre la espalda de los trabajadores.

Con este mismo marco los trabajadores de Banghó han tomado la planta esta semana y enfrentan los despidos producidos por el vaciamiento patronal.

Un nuevo paso a favor de la ART y las empresas se da con el decreto que el gobierno dictó para poner en marcha las modificaciones en el régimen de riesgos del trabajo perjudicando claramente derechos laborales y dando un golpe a la seguridad y a la vida de los trabajadores.

 Una nueva inundación en Santa Fe vuelve a poner al descubierto a donde nos lleva el modelo de agro-negocio: beneficio para unos pocos, despoblamiento de las zonas rurales, graves enfermedades causadas por el uso de agro-tóxicos, contaminación de las aguas, la tierra y el aire y, por si eso fuera poco, recurrentes inundaciones en pueblos y ciudades de la región. Aunque el Frente Progresista lleva 9 años en el poder, el gobernador Lifschitz pretende negar su responsabilidad en esta grave problemática. Más que volver a declarar la “emergencia hídrica”, ahora gobierno nacional y provincial deben dar respuestas concretas e integrales a los verdaderos damnificados. Más que atender la demanda de los grandes monopolios de tierra y de los pool de siembra (que en realidad son los responsables de esta situación), se debe atender los urgentes reclamos de las poblaciones inundadas (otorgando una reparación integral del daño) y buscar las soluciones de fondo a un problema que se agrava año a año. Denunciamos la pasividad oficial frente a los más de 500 canales clandestinos que llevan directamente el agua a los barrios más bajos de las ciudades cercanas. No se trata de “catástrofes inevitables”, se trata del resultado esperable de un modelo productivo que impermeabiliza el suelo y que, garantizando la ganancia presente de algunos pocos, no roba el futuro a todos.

Las mujeres vienen siendo víctimas de una violencia que en numerosos casos se lleva la vida. Esta semana el brutal femicidio de Elizabeth, apuñalada por su marido en Tigre, vuelve a conmocionar a toda la sociedad. Han aumentado los golpes, las denuncias por violencia y los femicidios, como así también los abusos y violaciones mientras el gobierno nacional, provincial y municipal hacen oídos sordos. El gobierno nacional aplica un ajuste brutal que recae sobre las espaldas de nuestro pueblo y en particular sobre las mujeres, empujándolas a la desocupación, al hambre, la pobreza y la indigencia. No estuvieron en las agendas del gobierno anterior ni en el actual las distintas problemáticas que afectan a las mujeres.

La Ley Antiterrorista votada por el gobierno anterior y el Protocolo Antipiquetes -acordado hace un año entre el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales- son las expresiones más notorias de una legislación represiva que busca negar el legítimo derecho a la protesta amparado en la Constitución Nacional y recortar los más elementales derechos democráticos.

Otra demostración de este creciente accionar represivo del Estado Nacional y los Provinciales es la antijurídica detención de Milagro Sala y de otros militantes en Jujuy por encabezar un acampe contra el gobernador Morales realizado hace más de un año.

Muchos dirigentes sindicales, políticos y sociales sufren la criminalización de la protesta. En particular denunciamos la situación de los dirigentes del SUTEF, gremio docente de Tierra del Fuego, que recibieron condenas penales por encabezar una lucha y luego fueron exonerados de sus cargos en las escuelas.

A todo lo anterior se suma la propuesta del Presidente Macri de bajar la “edad de punibilidad”. Reflota así un viejo planteo de los sectores de derecha que cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación. Buscan transformar en victimarios a las principales víctimas del delito organizado y las bandas narco-policiales: los niños y jóvenes de las barriadas más pobres. En lugar de garantizar desde el Estado los derechos de nuestros pibes, buscan criminalizar a los jóvenes que se organizan y luchan en los barrios.

Con el marco de la crisis internacional, la situación de la economía nacional se sigue agravando. Todas las medidas tomadas han tenido tres efectos fundamentales: la profundización de la crisis económica (inflación, desempleo, caída de la actividad), el aumento de las ganancias de los grupos más concentrados (la banca, los pools sojeros, las mineras) y el grave deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares (caída del salario y las jubilaciones, crecimiento del desempleo, peores condiciones de trabajo y de vida, etc).

Los pueblos originarios de Chubut, de La Primavera en Formosa, de la Comunidad Qom en todo el país, y la población de Jachal en San Juan o de El Bolsón en Río Negro resisten defendiendo y reclamando sus territorios ancestrales y el agua frente a la voracidad de mineras y terratenientes que cuentan con el aval de autoridades políticas y judiciales para llevar adelante todo tipo de tropelías.

Los entusiastas anuncios presidenciales del relanzamiento del proyecto de Vaca Muerta en Neuquén señalan con claridad cuál es el camino trazado para enfrentar la crisis del capitalismo argentino: profundizar el saqueo de nuestros bienes comunes, aumentar el endeudamiento y la dependencia externa y atacar los derechos de los trabajadores. Rechazamos esta política y repudiamos el acuerdo “a la baja” firmado por la burocracia del sindicato petrolero en la figura de Guillermo Pereyra, su Secretario General y además Senador de Neuquén por el MPN.

Es que no les alcanza con los bajos salarios, las tasas crecientes de desocupación y de trabajo no registrado y las malas condiciones laborales. Van por más. Pretenden avanzar sobre históricos derechos de la clase obrera argentina. La negociación por empresas, las “pasantías”, atar salarios a “productividad”, una nueva modificación del régimen de las ART o la modificación del sistema jubilatorio son algunas de las iniciativas plateadas. Nada demasiado novedoso, el “costo argentino” que tanto les preocupa a gobiernos y empresarios no son más que los derechos que conquistamos con años de lucha.

Está en marcha una seria ofensiva sobre la salud pública. La Cobertura Universal de Salud (CUS) es el engañoso nombre que le puso el machismo a su plan para privatizar y recortar el derecho a la salud de toda la población. Se vuelve a políticas de los ’90 en los que el Estado se corre de sus responsabilidades en este sentido y se transforma en el pagador de los servicios que presten los grandes grupos privados de la salud.

La grave situación golpea con especial fuerza en las barriadas más pobres. Crece la desocupación, desaparecen las “changas”, se achican los planes sociales y se profundiza la crisis de la salud y la educación públicas.

Con inflación que no cede y fuertes aumentos de impuestos y tarifas, la discusión salarial paritaria adquiere una importancia central. Los trabajadores aceiteros son un ejemplo en ese camino; debemos recuperar lo perdido el año pasado y valorar la inflación futura, pero junto con eso debemos reclamar para cada trabajador el derecho que establece la Constitución Nacional : un salario equivalente a la canasta familiar que le permita cubrir el conjunto de las necesidades de su grupo familiar.

La lucha de los investigadores precarizados del Conicet a fines del año pasado y en estos días los trabajadores de la gráfica AGR-Clarín y Banghó son ejemplo a seguir por el conjunto de la clase trabajadora. Con ocupaciones de los lugares de trabajo, unidad por abajo, democracia sindical y firmeza en la lucha hay que frenar la ofensiva patronal.

La grave situación plantea la necesidad de una huelga general activa que unifique al conjunto de los trabajadores y los sectores populares. Si gobierno nacional, gobiernos provinciales y empresarios han podido avanzar hasta acá ha sido por el acuerdo de los principales grupos políticos de la “oposición” y la complicidad de las conducciones sindicales que apuesta a sostener “la gobernabilidad” y a defender sus propios “negocios”.  Se trata de avanzar en desarrollar y unificar la resistencia por abajo y desde allí exigir el llamado a la huelga nacional.

Desde este espacio Multisectorial hacemos un llamado a las organizaciones de la región, a los trabajadores, a los desocupados, a los jubilados, a los compañeros originarios, a los estudiantes, al movimiento de mujeres y a todos los que coincidan con este planteamiento a avanzar en los caminos de unidad para enfrentar en las calles el plan de ajuste, saqueo y represión en marcha.

- Basta de ajuste y saqueo contra los trabajadores y el pueblo

-Solidaridad con los trabajadores de AGR-Clarín, los trabajadores de Banghó y todos los sectores en lucha.

-Repudio a la represión al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios

- No a la represión a los trabajadores y a todos los sectores en lucha

- No a la criminalización de la protesta. Desprocesamiento de los luchadores perseguidos. Libertad a todos los presos políticos.

- Ni una menos, hacia un paro nacional de mujeres.

- Abajo la Ley Antiterrorista , el protocolo antipiquetes y toda la legislación represiva.

- No a la baja de la edad de punibilidad. No a la criminalización de la juventud.

- No al saqueo de nuestros bienes comunes. No a la concentración y la extranjerización de la tierra. Fuera Benetton.

- Resarcimiento inmediato e integral a todos a todos los trabajadores afectados por las inundaciones en Santa Fe.

- Reforma integral del modelo productivo. No al saqueo que promueve el agro-negocio.

- Plan de obras públicas y urbanizaciones que resuelva la situación de las miles de familias inundadas.

- Defensa de los  puestos de trabajo. Ningún despido ni cierre de fábricas.

- Rechazo al DNU sobre la modificación de las ART que perjudica derechos laborales.

- Defensa de los derechos laborales. Ningún convenio “a la baja”. No a las pasantías y a todas las formas de precarización laboral.

- Paritarias libres. Aumento de salarios. Salario equivalente a la canasta familiar

- Aumento de jubilaciones. No a la modificación del sistema jubilatorio. No a los recortes en el PAMI

- Aumento de presupuesto de salud, educación y viviendas populares y no al pago de la deuda externa.

- Construyamos desde las bases y exijamos la convocatoria de una gran huelga general

**Marchemos por las calles de Rosario**

**Jueves 26 de enero – 17.30 horas – Plaza 25 de Mayo a Plaza San Martín**

Convocan: Amsafe Rosario, Ate Rosario, COAD, CTA-A Rosario, CCC, Pueblos Originarios en Lucha, PTS, IS, FSP, PCR-PTP, MST, OS, UP, PG, APDH, Causa, POP, Corr. El Militante, MAIz, Concejala Celeste Lepratti, Coordinación Docente, Lista Naranja, Coop. Pichangú, C. E. Cossettini, C. E. FHyA, Reagrupamiento hacia el PST, Pañuelos en Rebeldía, Asamblea Resistiendo Pérez, Frente de Unidad Guevarista, Union del Pueblo, Bodegón Cultural Casa de Pocho.